



El Servicio Nacional de Caminos en el ojo de la tormenta

Si el Gobierno Nacional no resuelve atinadamente la institucionalización del Servicio Nacional de Caminos, los próximos meses se caracterizarán por la protesta constante, con la consiguiente paralización de carreteras. A los paros cívicos de los departamentos del sur, se agregarán los paros de transportistas y otros sectores, afirma el presidente del Comité Cívico de Tarija, Ricardo Cuevas.

El Banco Mundial y el resto de los organismos internacionales que apoyan el financiamiento del Plan Nacional de Construcción de Carreteras se encuentran a punto de postergar definitivamente los préstamos programados para la presente gestión.

Se trata, afirma, que los partidos en función de gobierno se abstengan de controlar el Servicio Nacional de Caminos y respeten la norma para su institucionalización.

Los Comités Cívicos del Sur, reunidos en Sucre, el pasado 26 de abril, exigieron al presidente de la República la inmediata institucionalización del SNC con participación de la sociedad civil, para evitar el cuoteo político, que hasta ahora ha perjudicado las necesidades de integración física de los nueve departamentos del país.

Estado de emergencia

Los representantes cívicos, Vladimir Gutierrez, (Chquisaca); Guido Meruvia, (La Paz); David Mejía, (Cochabamba); Edgar Rendón, (Tarija); René Navarro, (Potosí) y Niver Montes (Oruro), advirtieron al gobierno nacional que los comités cívicos se encuentran en Estado de Emergencia y proponen una reunión nacional con participación de la Iglesia Católica, COB, empresa privada, prensa nacional y comités cívicos con el objetivo de buscar la paz y una efectiva solución estructural a las necesidades del país.

Asimismo, sostienen que el sistema político está en la obligación de buscar las soluciones a la crisis generalizada que vive el país, a corto plazo, mediante un pacto con los actores sociales. Los dirigentes cívicos se muestran partidarios de la revisión del modelo "con el fin de superar sus efectos nocivos que están llevando a la quiebra la economía nacional".

Escandalosa corrupción

Calificando como escandalosos los casos de corrupción hasta ahora conocidos, los dirigentes cívicos apuntaron hacia el enriquecimiento ilícito de los gobernantes que únicamente favorecen a su entorno familiar como "la más deplorable muestra de nepotismo que va de las más altas esferas de gobierno hasta los niveles más bajos de la administración pública". El cuoteo se ha convertido en la regla de oro para repartirse los cargos del aparato gubernamental sin más argumento que la gobernabilidad.

Critican al sistema político nacional, del oficialismo y la oposición poniendo en claro su incapacidad de resolver los problemas nacionales, punto nodal para que los sectores sociales manifiesten su descontento con medidas que perjudican las posibles soluciones económicas, "por ello es absolutamente imprescindible la voz de la sociedad civil para expresar sus propuestas de solución ante un drama que pareciera no tiene otro fin que el del colapso nacional" ■

Aversión por las cámaras de TV

El nuevo representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerardo Peraza, de nacionalidad salvadoreña, no es muy amigo de las cámaras de TV ni de las fotográficas. Resulta que hace unos días llegaron hasta sus oficinas un grupo de periodistas para preguntarle sobre las discrepancias entre gobierno y la oposición en torno a las cifras económicas.

Peraza, fue determinante. No quiero cámaras de televisión ni máquinas fotográficas. Esto no es un show, dijo a los sorprendidos reporteros que acostumbran abrirse paso sin esfuerzo ante el más renuente y "duro" personaje de la política o la economía. Pero, esta vez, se encontraron con funcionario terco que no dio brazo a torcer y prefirió hablar únicamente ante reporteros armados de lápiz y libreta de notas.

Pero más fue el ruido que las nueces, pues sus declaraciones no pasaron de las ya conocidas frases pronunciadas todos los días por autoridades y políticos de turno.

En un momento en que la guerra política tuvo como protagonista al opositor MNR, quien además de pedir la renuncia del Presidente de la República, lanzó

varios comunicados argumentando que Bolivia está al borde del colapso económico, desmentido por el Ministro de Hacienda, el representante del FMI, Gerardo Peraza, por toda respuesta empezó mencionando que el gobierno había cumplido las metas financieras correspondientes al primer trimestre del 2001.

Dijo que el déficit fiscal programado para el período fue de 508 millones de Bolivianos, de los que se ejecutaron 395 millones quedando un saldo de 113. En tanto el financiamiento resultó con un margen favorable de 46 millones de bolivianos. La pérdida de Reservas Internacionales Netas (RIN) programadas, con una cifra prevista de 139 millones se redujo tan sólo en 123 millones de Bolivianos.

En torno a la crisis de mayo, Peraza admitió podría afectar "la estabilidad macro del país" en el transcurso de la presente gestión, por tanto, si no mejora la situación se daría la posibilidad de realizar una evaluación de metas fijadas.

El rol del FMI es dar asistencia principalmente a Bolivia en la balanza de pagos, sujeta a negociaciones con el gobierno, en cuanto a metas a ser alcanzadas. Pero dijo confiar en que la concertación y el diálogo para que el gobierno llegue a solucionar los conflictos, más aún, si se toma en cuenta que el país ya ha ganado experiencia al haber transitado 15 años de democracia y mantenido una baja tasa de inflación.

Peraza atribuye los conflictos sociales del pasado y actuales a la lucha contra el contrabando, la erradicación de la hoja de coca, como hechos que impactaron negativamente en la demanda agregada, así como en la caída del PIB de 2000, índice que bajó de 3,5 a 2,4, aspecto que determinaría que la recuperación económica en el país podría ser lenta.

El sistema actual es viable. No hay duda para Peraza. Cree que el país se encuentra en buen pie y ante una importante cantidad de recursos provenientes del HIPC, aunque todo dependerá de las prefecturas y los municipios si optimizan o no su uso. Apoyó los argumentos hasta ahora impulsados por las instituciones respecto al control social sobre los recursos a distribuirse con preferencia en los municipios más pobres. Si la fórmula funciona en el marco de la Ley del Diálogo Nacional, entonces los recursos del HIPC tienen futuro, aunque aclaró que, sería ingenuo pensar en resultados a corto plazo pues los problemas "vienen de años atrás y con un nivel elevado de pobreza" ■